



Asamblea General

Distr. general
25 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 54/2020, relativa a Zuhair Abdulhadi Haj al-Mahmeed (Kuwait)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 26 de marzo de 2020 al Gobierno de Kuwait una comunicación relativa a Zuhair Abdulhadi Haj al-Mahmeed. El Gobierno respondió a la comunicación el 12 de junio de 2020. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Zuhair Abdulhadi Haj al-Mahmeed nació en 1959 y reside en la ciudad de Kuwait. Trabajó como consultor estratégico para la compañía Kuwait Airlines. Se jubiló en 2012, y desde entonces ha seguido trabajando en documentos de investigación política, social y cultural. Tiene una larga trayectoria de participación cívica y ocupa varios cargos honoríficos, entre ellos el de Secretario General del Pacto Nacional Islámico y Secretario General del Consejo de Relaciones Islámico-Cristianas. También es miembro de la Sociedad Económica de Kuwait y de la Sociedad de Derechos Humanos de Kuwait.

a. Detención y reclusión

5. La fuente informa de que el 15 de agosto de 2015 el Sr. Al-Mahmeed fue detenido en su oficina, en la ciudad de Kuwait, por agentes de la seguridad del Estado, los servicios de inteligencia y la policía, que iban enmascarados y vestidos de civil. Los agentes no le mostraron ninguna orden de detención ni lo informaron de los motivos por los que lo detenían. A continuación lo acompañaron a su casa, que registraron sin mediar ninguna orden de registro y provocando graves daños materiales. La fuente alega que las fuerzas de seguridad se incautaron de algunos objetos personales del Sr. Al-Mahmeed, como su ordenador, su teléfono y dinero, antes de trasladarlo a la Dirección de Seguridad del Estado, donde permaneció recluido hasta el 10 de septiembre de 2015, día en que fue transferido a la Prisión Central.

6. Durante los interrogatorios que se le realizaron entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre de 2015, el Sr. Al-Mahmeed fue presuntamente golpeado y sometido a descargas eléctricas. También le vendaron los ojos y lo obligaron a permanecer en la misma posición durante muchas horas. Además, lo privaron de sueño y comida y, entre otras amenazas, le dijeron que sus familiares sufrirían actos de violencia y perderían la nacionalidad. La fuente alega que, a causa de esos actos constitutivos de tortura, en dos ocasiones el Sr. Al-Mahmeed perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital militar.

7. La fuente indica que entre el 15 y el 19 de agosto de 2015 el Sr. Al-Mahmeed fue llevado a diario a las dependencias de la Fiscalía, ante la cual denunció haber sido torturado. No obstante, no se ordenó iniciar una investigación y, al parecer, el Sr. Al-Mahmeed volvió a ser golpeado, amenazado e insultado. Según la información recibida, una persona del Ministerio del Interior que estaba presente durante los malos tratos infligidos al Sr. Al-Mahmeed en las dependencias de la Fiscalía le dijo que la Dirección de Seguridad del Estado había recibido autorización para matarlo.

8. Según se informa, durante la vista celebrada el 19 de agosto de 2015 el Sr. Al-Mahmeed fue acusado de “espionaje para la República Islámica del Irán y su agente Hizbulah”, “posesión de armas” y “conspiración para llevar a cabo actos hostiles, como sembrar el pánico y el desorden en Kuwait”. La fuente añade que posteriormente el Sr. Al-Mahmeed fue devuelto a la Dirección de Seguridad del Estado, donde siguió siendo objeto de actos de tortura.

9. La fuente informa de que el Sr. Al-Mahmeed permaneció recluido en régimen de incomunicación durante todo el período de interrogatorio, sin poder acceder a un abogado ni a su familia. Por último, fue obligado a firmar los documentos relativos a la investigación, que no pudo leer porque no le permitieron ponerse sus gafas. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2015, fue trasladado a la Prisión Central.

10. Según la fuente, los abogados del Sr. Al-Mahmeed no pudieron reunirse con él antes del 10 de septiembre de 2015, cuando ya había sido interrogado y obligado a firmar confesiones falsas.

11. La fuente indica que el Sr. Al-Mahmeed fue juzgado junto con otros 24 acusados kuwaitíes —todos ellos chífes— y 1 acusado iraní en la causa núm. 55/2015. El caso se conoce también con el nombre de “célula de Abdali”, ya que las autoridades de Kuwait aseguraron haber encontrado un gran alijo de armas en una granja de la zona de al-Abdali, en el norte del país. Todos los acusados fueron juzgados por los cargos de “espionaje para la República Islámica del Irán y su agente Hizbulah”, “posesión de armas” y “conspiración para llevar a cabo actos hostiles, como sembrar el pánico y el desorden en Kuwait”.

12. Según la fuente, el juicio del Sr. Al-Mahmeed comenzó el 15 de septiembre de 2015. Durante la tercera vista, celebrada el 4 de octubre de 2015, los abogados del Sr. Al-Mahmeed solicitaron que se les facilitaran las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión correspondientes a: la entrada del Palacio de Justicia, para probar que se les había impedido estar presentes en la investigación; las dependencias de la Fiscalía, situada en el octavo piso del edificio, para probar que el Sr. Al-Mahmeed había sido torturado y amenazado; y el hospital militar, para probar que el Sr. Al-Mahmeed había ingresado en él y había sido tratado de las heridas sufridas durante las torturas. También solicitaron recibir del hospital militar el historial médico y el registro de ingreso del Sr. Al-Mahmeed.

13. Según la fuente, se habían presentado ante el tribunal documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional en los que se indicaba que el Sr. Al-Mahmeed había sido trasladado en dos ocasiones al hospital militar durante su interrogatorio, pero, al parecer, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud retenían el historial médico aduciendo que había “desaparecido”. La fuente añade que la ropa del Sr. Al-Mahmeed fue destruida para ocultar las pruebas de tortura y que la solicitud de sus abogados de que se les facilitaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia fue rechazada aduciendo que ya habían sido borradas.

14. La fuente indica que el 12 de enero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia condenó al Sr. Al-Mahmeed a cinco años de prisión por posesión de armas de fuego y municiones sin licencia debido a que no había devuelto las armas y municiones que había utilizado al servir en el ejército durante la guerra del Golfo. Fue absuelto de todos los cargos relacionados con atentados a la seguridad del Estado o cooperación con agentes extranjeros.

15. Según la fuente, el Sr. Al-Mahmeed permaneció en régimen de aislamiento durante casi cinco meses, del 15 de agosto de 2015 al 12 de enero de 2016.

16. La fuente indica que el 16 de marzo de 2016, durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Apelación, los abogados del Sr. Al-Mahmeed volvieron a solicitar que se les facilitaran las imágenes de las cámaras de vigilancia. Las autoridades respondieron que ya habían sido borradas y no estaban disponibles, dado que, por razones de capacidad, ese tipo de grabaciones se conservaban como máximo durante un mes. El 13 de abril de 2016 los abogados del Sr. Al-Mahmeed también solicitaron acceso al historial médico de su cliente, al registro de su ingreso en el hospital militar y a la ropa que, presuntamente, presentaba manchas inequívocas de sangre como resultado de las torturas a las que había sido sometido. La fuente añade que las autoridades no accedieron a esas solicitudes aduciendo que no disponían del historial médico del Sr. Al-Mahmeed y que no había ningún registro oficial de que este hubiera ingresado en el hospital militar en dos ocasiones. Además, afirmaron que la ropa del Sr. Al-Mahmeed había sido destruida en cumplimiento del protocolo de higiene. El 21 de julio de 2016, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

17. La fuente indica que la Fiscalía recurrió la sentencia dictada contra el Sr. Al-Mahmeed y otros acusados para solicitar que se les aumentaran las penas. El 19 de marzo de 2017 comenzó el juicio ante el Tribunal Supremo de Kuwait. El Tribunal celebró tres sesiones: la primera, para examinar el caso; la segunda, para que las dos partes expusieran sus argumentos acerca de si el fallo y las actuaciones del Tribunal de Apelación se habían ajustado o no a ley; y la tercera, para dictar la sentencia definitiva.

18. Según la fuente, el 18 de junio de 2018 el Tribunal Supremo dictaminó que la sentencia y el procedimiento del Tribunal de Apelación no habían contravenido la ley, pero aumentó la pena impuesta al Sr. Al-Mahmeed de 5 a 15 años de prisión con trabajos

forzados por considerarlo culpable de los cargos relacionados con la seguridad del Estado, de los que había sido absuelto por los tribunales anteriores.

19. Según la fuente, actualmente el Sr. Al-Mahmeed permanece recluido en la Prisión Central de Kuwait tras haber sido condenado a 15 años de cárcel.

20. La fuente indica que el Sr. Al-Mahmeed había padecido varios problemas de salud antes de su detención, por lo que se le realizaba un seguimiento periódico y recibía el correspondiente tratamiento y medicación. Añade que, desde su detención y posterior reclusión, su estado de salud se ha deteriorado notablemente debido a las torturas a las que fue presuntamente sometido durante la investigación realizada del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2015 y al hecho de no haber recibido atención médica ni tratamiento para sus problemas preexistentes.

21. La fuente indica que el Sr. Al-Mahmeed fue trasladado al hospital de Al-Farwaniya el 30 de noviembre de 2017 y el 9 de octubre de 2019, y al hospital de Amiri, el 29 de enero de 2018 y el 4 de noviembre de 2019, porque se sospechaba que había sufrido un ataque cardíaco. No obstante, una vez que las pruebas médicas determinaron que no había sido un infarto, fue devuelto a la prisión sin que se le realizaran más exámenes ni se le dispensara ningún tratamiento.

22. Según la fuente, en esos cuatro traslados de la Prisión Central a los centros hospitalarios, al Sr. Al-Mahmeed no solo se le negaron los exámenes médicos y el tratamiento que necesitaba, sino que sufrió humillaciones y malos tratos durante el transporte y la hospitalización. Fue presuntamente golpeado e insultado por las fuerzas de seguridad y los guardias de la prisión que lo llevaron al hospital. La fuente afirma que le vendaron los ojos, lo desnudaron y lo sometieron a un registro corporal. Pese a su delicada salud, también le ordenaron subir y bajar escaleras y hacer flexiones. Además, en lugar de trasladarlo al hospital en una ambulancia, lo introdujeron en un vehículo de comando militar de las fuerzas de seguridad sin camilla, asientos ni cinturones. Una vez en el hospital, al parecer, lo ataron a la cama y no le permitieron usar el baño.

23. La fuente indica que el 26 de noviembre de 2019 el Sr. Al-Mahmeed fue trasladado al hospital, donde se le realizaron varios exámenes médicos que concluyeron que era necesario someterlo a una operación de cirugía ocular para evitar que perdiera totalmente la vista. También recibió tratamiento médico para sus otros problemas de salud. Por último, y lo que es más importante, se le realizó una resonancia magnética que reveló que padecía una hernia discal grave y que, de no tratarse, se vería expuesto a un riesgo elevado de sufrir una parálisis. Un neurocirujano del Hospital Público de Colmar (Francia) analizó los resultados de la resonancia y recomendó una intervención urgente, seguida de tres meses de reposo en cama y un año de fisioterapia periódica.

b. Análisis jurídico

24. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Al-Mahmeed se inscribe en las categorías I y III del Grupo de Trabajo (A/HRC/36/38).

i. Categoría I

25. Según la fuente, la detención del Sr. Al-Mahmeed se inscribe en la categoría I, puesto que se llevó a cabo sin orden judicial y sin que le fueran comunicados los motivos, lo que constituyó una vulneración de su derecho a ser informado sin demora de las razones por las que se lo detenía. La fuente sostiene, por lo tanto, que dicha detención vulneró: la legislación nacional; el principio 7 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal; y el artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

26. La fuente afirma además que el Sr. Al-Mahmeed permaneció en régimen de incomunicación durante 26 días, del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2015, por lo que fue sustraído de la protección de la ley y privado de las garantías jurídicas que lo amparaban como persona detenida, como el derecho a impugnar la legalidad de su privación de libertad, establecido en el principio 10 de los Principios y Directrices Básicos

de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. La fuente sostiene además que la reclusión en régimen de incomunicación es en principio una forma de detención arbitraria y que con ella se vulneró el derecho del Sr. Al-Mahmeed al reconocimiento de su personalidad jurídica, amparado por el artículo 16 del Pacto.

27. La fuente sostiene también que, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de Kuwait, toda persona detenida puede permanecer privada de libertad durante un máximo de 48 horas. Por consiguiente, el Sr. Al-Mahmeed fue presuntamente interrogado por un período superior al máximo fijado por la ley para la detención policial.

28. Además, la fuente sostiene que, al dictar la sentencia en casación, el Tribunal Supremo se excedió en sus competencias. Explica que el Tribunal Supremo de Kuwait se considera un tribunal de casación, que actúa como órgano supervisor. Está facultado para examinar las sentencias de los tribunales inferiores y determinar si han aplicado las leyes de manera adecuada y razonable desde el punto de vista jurídico. Según la fuente, el tribunal de casación no se pronuncia, en sentido estricto, sobre las disputas que han dado lugar a las decisiones que le son sometidas. No obstante, según la legislación, el Tribunal Supremo puede anular una sentencia del Tribunal de Apelación, aunque únicamente si esta se ha dictado en vulneración de la ley o incurriendo en un error en su aplicación o interpretación, o bien si existe un motivo de nulidad en el fallo o las actuaciones.

29. Según la fuente, la Fiscalía recurrió la sentencia dictada contra el Sr. Al-Mahmeed para solicitar que se le aumentara la pena. El 18 de junio de 2018 el Tribunal Supremo dictaminó que la sentencia y el procedimiento del Tribunal de Apelación no habían contravenido la ley, pero aumentó la pena impuesta al Sr. Al-Mahmeed de 5 a 15 años de prisión con trabajos forzados por considerarlo culpable de los cargos relacionados con la seguridad del Estado, de los que había sido absuelto por los tribunales anteriores. La fuente afirma que el Tribunal Supremo se excedió en su competencia, establecida en la Ley núm. 40 de 1972, ya que se pronunció sobre el fondo de la cuestión pese a concluir que no había habido ninguna vulneración de la ley por parte de los tribunales inferiores ni error alguno en su aplicación o interpretación. La fuente sostiene además que el Tribunal Supremo condenó al Sr. Al-Mahmeed sin realizar un examen exhaustivo de los hechos y sin permitirle que se defendiera, lo que vulnera el principio de igualdad de medios procesales. Por consiguiente, la fuente considera que la sentencia del Tribunal Supremo es nula y carece de todo fundamento jurídico.

30. En vista de lo anterior, la fuente afirma que la detención del Sr. Al-Mahmeed y la privación de libertad que se le impuso como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo carecían de fundamento jurídico, lo que constituye una vulneración del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

ii. Categoría III

31. La fuente sostiene que la privación de libertad impuesta al Sr. Al-Mahmeed es arbitraria porque desde su mismo inicio se ha vulnerado presuntamente su derecho a un juicio imparcial.

32. Como ya se ha señalado, las solicitudes de los abogados del Sr. Al-Mahmeed para que se les facilitaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia y el historial médico, la ropa y el registro de ingreso en el hospital militar de su cliente fueron denegadas. La fuente sostiene que esta forma de retención o destrucción de pruebas esenciales constituye una clara vulneración del derecho del Sr. Al-Mahmeed a la igualdad de medios procesales en un procedimiento judicial, amparado por el artículo 14 del Pacto. Además, según la fuente, el hecho de no registrar todo ingreso de una persona en un centro médico para recibir tratamiento infringe también el artículo 17 de la Ley núm. 49 de 1960 de Kuwait.

33. La fuente afirma además que el Sr. Al-Mahmeed no pudo defenderse ante el Tribunal Supremo en un proceso contradictorio, ya que no se permitió que su abogado presentara ninguna prueba en relación con las acusaciones adicionales formuladas por la Fiscalía. Por consiguiente, según la fuente, fue declarado culpable de los cargos

relacionados con la seguridad del Estado sin tener una oportunidad razonable de presentar su defensa.

34. Además, durante el interrogatorio, el Sr. Al-Mahmeed fue presuntamente torturado y sometido a malos tratos. Por ello, la fuente sostiene que se han vulnerado el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto y el artículo 13 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

35. La fuente alega además que, de conformidad con la resolución 60/148 de la Asamblea General, la reclusión en régimen de incomunicación de que fue objeto el Sr. Al-Mahmeed durante 26 días puede en sí misma constituir tortura. Además, si bien el aislamiento debe ser una medida excepcional y aplicarse durante el menor tiempo posible, al Sr. Al-Mahmeed se le impuso esa medida durante casi cinco meses, del 15 de agosto de 2015 al 12 de enero de 2016. La fuente sostiene que imponer a los reclusos el régimen de aislamiento durante más de 15 días puede constituir una tortura o un trato o castigo cruel, inhumano o degradante.

36. Además, la fuente afirma que el Sr. Al-Mahmeed fue obligado a firmar los documentos relativos a la investigación, que no pudo leer por no disponer de sus gafas. Según la fuente, el hecho de que la confesión del Sr. Al-Mahmeed fuera admitida como prueba en su contra durante el juicio constituye una grave vulneración del principio de exclusión y contraviene las obligaciones que incumben a las autoridades de Kuwait en virtud del artículo 15 de la Convención contra la Tortura y el principio 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

37. Según la fuente, el hecho de negar al Sr. Al-Mahmeed el acceso a asistencia letrada, situación que se prolongó durante todo el período de interrogatorio, vulnera la legislación nacional de Kuwait, los principios 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, el artículo 14 del Pacto y la regla 61 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

38. El 3 de diciembre de 2015, varios expertos enviaron a las autoridades de Kuwait un llamamiento urgente conjunto (comunicación núm. UA KWT 6/2015), al que estas respondieron el 21 de enero de 2016.

Respuesta del Gobierno

39. El 26 de marzo de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Asimismo, le pidió que presentara, a más tardar el 25 de mayo de 2020, información detallada sobre la situación actual del Sr. Al-Mahmeed y aclarara las disposiciones jurídicas en virtud de las cuales seguía privado de libertad, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por Kuwait en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. El Grupo de Trabajo exhortó además al Gobierno de Kuwait a que velara por la integridad física y mental del Sr. Al-Mahmeed.

40. El 27 de marzo del 2020, el Gobierno de Kuwait solicitó una prórroga de conformidad con el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, que le fue concedida, quedando fijado el nuevo plazo en el 25 de junio de 2020. El Gobierno de Kuwait presentó su respuesta el 12 de junio de 2020.

41. El Gobierno sostiene, en primer lugar, que las alegaciones de la fuente tienen motivaciones políticas instigadas por agentes partidistas externos, que pretenden influir en las decisiones del poder judicial de Kuwait que siguieron a la detención de los miembros de la célula de Abdali, entre ellos el Sr. Al-Mahmeed.

42. Los sospechosos pertenecientes a la célula de Abdali, como el Sr. Al-Mahmeed, fueron detenidos de manera pública, transparente y respetuosa con las normas jurídicas nacionales e internacionales generalmente aceptadas, tras haberse descubierto que almacenaban grandes cantidades de explosivos obtenidos en el extranjero y tenían intención

de cometer actos terroristas. El Gobierno señala que toda esta información relativa a la detención y la incautación de armas de la célula de Abdali fue difundida por los medios nacionales e internacionales. A continuación, los sospechosos comparecieron ante los tribunales de Kuwait y se descubrió que agentes extranjeros regionales habían estado implicados en los hechos. Posteriormente, algunas entidades vinculadas a esos agentes extranjeros y regionales trataron de hacer creer, con falsedades, que las confesiones de los sospechosos se habían obtenido mediante tortura. El objetivo de tales acusaciones era sembrar la discordia.

43. Aun así, los tribunales de Kuwait investigaron las denuncias de tortura, y el examen médico al que se sometió al Sr. Al-Mahmeed probó que eran infundadas. El informe forense confirmó que no había sido objeto de tortura.

44. El relator de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento confirmó también que el Sr. Al-Mahmeed estaba sano y salvo y que las acusaciones de tortura eran falsas. El Gobierno indica que el relator había verificado las condiciones de reclusión en la Prisión Central y había mostrado su satisfacción por que el examen médico hubiera confirmado que el Sr. Al-Mahmeed se encontraba bien y no había sido sometido a tortura.

45. El Gobierno sostiene que en la causa del Sr. Al-Mahmeed se siguieron todos los procedimientos propios de un juicio imparcial y que el acusado estuvo representado por un grupo de abogados, cuyos nombres también aparecieron en los medios de comunicación.

46. El Gobierno reafirma su compromiso con las disposiciones del Pacto. Considera que adquirir e introducir explosivos de contrabando en Kuwait, almacenarlos y entrenar a personas para que los utilicen con fines terroristas constituyen motivos válidos conforme a la ley, como se exige en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, para mantener la seguridad y la protección, no solo en beneficio de Kuwait, sino de la comunidad internacional en su conjunto.

47. El Gobierno recuerda también los principios que rigen el interrogatorio y la custodia y el trato de las personas sometidas a cualquier forma de detención o privación de libertad, consagrados en la Constitución y el Código Penal, y que refutan las alegaciones de la fuente.

48. Se inició contra el Sr. Al-Mahmeed la causa núm. 51 de 2015 por delitos contra la seguridad del Estado (a la que la fuente se refiere como “causa núm. 55/2015”), en el marco de la cual la Fiscalía puso en marcha una investigación, basada a su vez en las investigaciones del Departamento General de Investigación Penal y el Servicio de Seguridad del Estado, sobre una célula terrorista que poseía una enorme cantidad de armas, municiones y explosivos y cuyos miembros actuaban en connivencia con un Estado extranjero para cometer actos hostiles contra Kuwait.

49. La Fiscalía acusó al Sr. Al-Mahmeed de:

Sección I:

a) Cometer deliberadamente actos que suponían una amenaza para la unidad y la integridad territorial de Kuwait, a saber, la adquisición, almacenamiento y transporte de materiales explosivos, armas y municiones, y recibir formación sobre su uso con intención de cometer actos ilícitos;

b) Cooperar y comunicarse con un Estado extranjero y con Hizbulah con el propósito de llevar a cabo actos hostiles y sembrar el pánico y el desorden en Kuwait;

c) Aceptar fondos y subsidios de un país extranjero y de Hizbulah con intención de cometer actos que atentaban contra los intereses nacionales de Kuwait;

d) Unirse al grupo Hizbulah teniendo pleno conocimiento de su objetivo, a saber, la difusión de principios destinados a destruir por medios ilícitos los sistemas fundamentales del país y socavar por la fuerza su orden social y económico.

Sección II:

a) Recibir formación sobre el uso de armas, municiones y explosivos a sabiendas de que quien la imparte tiene intención de utilizarlos con fines ilegales;

b) a e) Adquirir explosivos, ametralladoras, armas de fuego y municiones sin obtener una licencia de la autoridad competente y con el propósito de utilizarlos para cometer delitos; y adquirir ametralladoras sin autorización para su adquisición o posesión.

Sección III:

a) Promover la afiliación al grupo Hizbulah teniendo pleno conocimiento de su objetivo, a saber, la difusión de principios destinados a destruir por medios ilícitos los sistemas fundamentales del país y socavar por la fuerza su orden social y económico;

b) Participar, mediante el respaldo y la prestación de apoyo a los miembros de Hizbulah, en la impartición de formación sobre el uso de explosivos, armas y municiones, con el propósito de recabar la ayuda de los destinatarios para lograr fines ilegales.

Sección IV:

a) Adquirir dispositivos de escucha inalámbrica sin licencia de la autoridad competente.

50. El 1 de septiembre de 2015, la Fiscalía remitió la causa contra el Sr. Al-Mahmeed y otros al Tribunal Penal. En la vista celebrada el 16 de diciembre de 2015, el Tribunal condenó al Sr. Al-Mahmeed a cinco años de prisión con trabajos forzados y lo absolvió de varios de los cargos que figuran en las secciones I, II y III. El Tribunal declaró inadmisibles las acusaciones relativas a la adquisición de explosivos, armas, ametralladoras, municiones y dispositivos de escucha.

51. La Fiscalía recurrió la sentencia con el fin de rectificar un error en la aplicación de la ley, solicitar una sentencia más severa y establecer las razones de la absolución del acusado de algunos de los cargos. El acusado, a su vez, también recurrió la sentencia.

52. En una vista celebrada el 21 de julio de 2016, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia condenatoria dictada contra el acusado por los delitos que figuran en los apartados b), c), d) y e) de la sección II, cometidos en Kuwait, y la pena de cinco años de prisión con trabajos forzados; confirmó la absolución por los cargos que figuran en la sección IV; anuló el dictamen según el cual los tribunales de Kuwait no tenían competencia para examinar los cargos que figuran en la sección III b); y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia.

53. Tanto la Fiscalía como el acusado recurrieron la decisión ante el Tribunal de Casación.

54. En una vista celebrada el 18 de junio de 2017, el Tribunal de Casación declaró admisible el recurso interpuesto por la Fiscalía e inadmisibles los interpuestos por el acusado. El Tribunal condenó al Sr. Al-Mahmeed a 15 años de prisión por el cargo que se le imputaba, con otros 5 años adicionales bajo supervisión policial. Por lo demás, confirmó la sentencia impugnada.

55. En respuesta a la alegación relacionada con la detención y sus circunstancias, el Gobierno afirma que el Sr. Al-Mahmeed fue aprehendido legalmente en cumplimiento de una orden judicial dictada por la Fiscalía el 15 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal. La policía kuwaití ejecutó la orden en la madrugada del 16 de agosto de 2015. Los agentes mostraron su identificación militar y las órdenes de detención y registro al Sr. Al-Mahmeed, e inmediatamente lo trasladaron a su casa para registrarla, de acuerdo con la orden emitida por el Fiscal Adjunto. Los agentes entraron en la casa y respetaron las normas jurídicas que rigen los registros domiciliarios. Se encontraron armas, municiones y explosivos, incluida una bomba. Dichos objetos, junto con el equipo militar, fueron incautados por la brigada especial de manejo de explosivos.

56. El Gobierno sostiene que el Sr. Al-Mahmeed fue detenido en flagrante delito y en posesión de los objetos mencionados. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de torturarlo u obligarlo a confesar.

57. Tras ser aprehendido, la mañana del 17 de agosto de 2015, el Sr. Al-Mahmeed compareció sin demora ante la Fiscalía, que lo informó de los hechos de que se lo acusaba. Él admitió los delitos —salvo el de cometer actos hostiles contra el Estado— y describió con detalle su participación y la de sus cómplices en ellos, así como sus vínculos con

Hizbulah. Declaró que su autoridad religiosa era el líder de la República Islámica del Irán. El interrogatorio concluyó el 19 de agosto de 2015.

58. A continuación, la Fiscalía dictó una orden de prisión preventiva contra el acusado en espera de la investigación. El 24 de agosto de 2015 dicha orden fue prorrogada por 15 días por el juez competente, de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal de Kuwait.

59. El Gobierno también impugna la alegación relativa a la confiscación de las pertenencias del Sr. Al-Mahmeed. Las pertenencias incautadas fueron ropa y equipo militar, no el ordenador ni el teléfono del detenido, como afirma la fuente.

60. En cuanto a las denuncias de tortura y malos tratos, el Gobierno las considera infundadas. Como ya se ha indicado, el Sr. Al-Mahmeed compareció ante la Fiscalía en las vistas celebradas el 17 y el 19 de agosto de 2015 en el marco del proceso de investigación. En ambas vistas fue interrogado por el fiscal encargado de la investigación y se constató que su cuerpo no presentaba ninguna lesión. Durante el interrogatorio no mencionó en ningún momento haber sido sometido a tortura. El 1 de septiembre de 2015 compareció ante el tribunal, pero no denunció tortura alguna, únicamente que sufría malnutrición. Por decisión del tribunal, fue dirigido de inmediato al médico forense, cuyo informe concluyó que el Sr. Al-Mahmeed gozaba de un estado de salud normal y no presentaba sequedad en las manos ni los ojos, ni ningún otro síntoma indicativo de malnutrición. Tampoco presentaba indicio alguno de haber sido sometido a tortura física o psíquica. El tribunal celebró consultas con un experto en medicina forense del Departamento General de Pruebas Penales. Se hizo referencia a su informe en la vista celebrada el 21 de octubre de 2015, en presencia del Sr. Al-Mahmeed y sus abogados, sin que ninguno de ellos formulara objeción alguna.

61. Además, el Gobierno afirma que, durante su interrogatorio por la Fiscalía, el acusado admitió haber cometido el delito. Tan pronto como el Sr. Al-Mahmeed hizo esa confesión, el investigador la consignó en el acta y preguntó extensamente sobre el asunto al interrogado. Este no solicitó que se pospusiera el interrogatorio hasta que pudiera estar presente su abogado ni hasta ningún otro momento. Antes de que firmara su declaración, esta le fue leída en voz alta y él no formuló objeción alguna ni pidió que se añadiera una nota para indicar que se había negado a firmarla. En las actas de las vistas sobre la causa núm. 51 de 2015, relativa a la seguridad del Estado, no figura ninguna referencia a esas alegaciones.

62. El Gobierno impugna también las alegaciones de que el Tribunal Supremo se excedió en su competencia y de que la sentencia que dictó carecía de fundamento jurídico. A este respecto, explica que los tribunales están organizados de conformidad con la norma establecida en el artículo 164 de la Constitución. El Tribunal de Casación supervisa la aplicación de la ley por los tribunales ordinarios y la conformidad de los procedimientos que estos siguen para examinar los casos y dictar sentencia, y anula las sentencias que contravengan la ley. Cuando admite a trámite un recurso, el Tribunal de Casación anula la sentencia impugnada para emitir otra. En el presente caso, dictaminó que la sentencia impugnada vulneraba la ley y su fundamentación presentaba defectos, por lo que debía ser anulada. El Gobierno explica también que, conforme a la ley, las normas que rigen los recursos penales interpuestos ante el Tribunal Supremo se aplican también a los recursos interpuestos ante la Sala de Casación, salvo que la ley disponga otra cosa.

63. En las actas del Tribunal de Casación puede comprobarse que el acusado estuvo en efecto presente en las vistas celebradas el 19 y el 26 de marzo de 2017, acompañado de un abogado que presentó su defensa y planteó los puntos que figuran en el acta del recurso de casación. Esto refuta la afirmación de que el acusado no pudo defenderse ante el Tribunal Supremo.

64. A juicio del Gobierno, las alegaciones relativas a los diversos traslados al hospital del Sr. Al-Mahmeed, que tuvieron lugar entre el 30 de noviembre de 2017 y el 4 de noviembre de 2019, y a su regreso a la prisión sin que se le realizaran más exámenes médicos ni se le dispensara tratamiento, así como a los malos tratos conexos, también son falsas e infundadas. El Gobierno recuerda los reglamentos internos relativos a la atención de la salud de los reclusos para impugnar las alegaciones de la fuente. A continuación,

facilita información detallada acerca de los traslados hospitalarios que requirió el Sr. Al-Mahmeed.

65. La afirmación de que el Sr. Al-Mahmeed padece una hernia discal grave que, de no tratarse, podría provocarle una parálisis es completamente falsa. En su historial no figuraba la presunta recomendación del neurocirujano del Hospital Público de Colmar (Francia).

66. En cuanto a la afirmación de que el Sr. Al-Mahmeed fue interrogado por un período superior al máximo fijado por la ley para la detención policial, el Gobierno sostiene que la palabra “detención”, utilizada en la comunicación, no es correcta, puesto que no se utiliza en la legislación de Kuwait. En realidad, el Sr. Al-Mahmeed fue aprehendido conforme a ley en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía el 15 de agosto de 2015. Compareció ante la Fiscalía para ser interrogado el 17 de agosto de 2015, de conformidad con el artículo 60, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, mencionado en la comunicación.

67. Según el Gobierno, las alegaciones de que el Sr. Al-Mahmeed no tuvo acceso a las pruebas, a su historial médico y a su ropa, y de que permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 26 días, en contravención de varias disposiciones del Pacto, no reflejan la realidad. El juicio se celebró ante los tribunales ordinarios en el marco de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. La causa se tramitó siguiendo los procedimientos consuetudinarios y con todas las garantías previstas en el Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que los órganos judiciales deben ser independientes. Con ese fin, las sentencias dictadas por los tribunales pueden recurrirse.

68. Además, el Sr. Al-Mahmeed ha disfrutado de todos los privilegios disponibles en la Prisión Central; en particular, ha recibido periódicamente la visita de sus familiares.

Comentarios adicionales de la fuente

69. Se transmitió la respuesta del Gobierno a la fuente para que formulara nuevos comentarios, que la fuente presentó el 13 de julio de 2020.

70. La fuente observa, en primer lugar, que el Gobierno no ha aportado ninguna prueba para fundamentar sus afirmaciones.

71. Con respecto a las denuncias de tortura y las subsiguientes investigaciones, la fuente señala que no se realizó un examen forense al Sr. Al-Mahmeed hasta el 20 de septiembre de 2015. Había transcurrido tanto tiempo que algunas señales de las lesiones sufridas habían empezado a desaparecer y ya no podían reconocerse con nitidez. En el informe forense se indica que se examinaron las partes del cuerpo donde presuntamente el Sr. Al-Mahmeed había sufrido lesiones y se observaron eritemas y pequeños indicios de cicatrización, algunos de ellos alrededor de las muñecas y los tobillos (marcas de esposas, recientes y antiguas). El movimiento de las dos manos y piernas se consideró normal¹. Si bien el informe alude a posibles lesiones anteriores, la fuente reafirma que los médicos forenses no realizaron una investigación exhaustiva de las denuncias de tortura, sino que examinaron a los acusados de forma superficial. Además, la fuente afirma que los médicos del Departamento de Medicina Legal no son independientes ni imparciales, como lo corroboran las observaciones finales del Comité contra la Tortura².

72. La fuente señala asimismo que el Gobierno no ofrece en ningún momento una explicación jurídica acerca de la autoridad del Tribunal Supremo para aumentar la pena impuesta al Sr. Al-Mahmeed de 5 a 15 años de prisión y se limita a reiterar el argumento que ya había expuesto en su comunicación al respecto.

73. La fuente impugna las afirmaciones del Gobierno con respecto a la detención y sus circunstancias. El Sr. Al-Mahmeed no confesó los delitos de que se lo acusaba en ningún momento del interrogatorio. Sí insistió en que se le permitiera hablar con sus abogados, lo

¹ Dirección General de Pruebas Penales, informe forense núm. 21 de 2015, 20 de septiembre de 2015, párr. 8.

² CAT/C/KWT/CO/3, párrs. 15 y 42.

que le fue denegado, y en último término fue obligado a firmar, bajo coacción, los documentos relativos a la investigación, que no pudo leer porque no le permitieron ponerse sus gafas. La fuente también reafirma que al Sr. Al-Mahmeed se le incautaron sus pertenencias, incluido su pasaporte, y reitera la alegación de que fue sometido a tortura.

74. En cuanto a la cuestión de la competencia de los tribunales, la fuente sostiene que, si bien las autoridades de Kuwait afirman que la sentencia del Tribunal de Apelación de fecha 21 de julio de 2016 contravino la ley, la causa no fue devuelta para que se celebrara un nuevo juicio. En lugar de ello, el Tribunal de Casación elevó la pena impuesta al Sr. Al-Mahmeed de 5 a 15 años de prisión, pronunciándose sobre el fondo de la cuestión sin permitir que los abogados del acusado presentaran su defensa. Si bien el Estado afirma también que los abogados del Sr. Al-Mahmeed pudieron presentar su defensa durante las vistas celebradas ante el Tribunal de Casación el 19 y el 26 de marzo de 2017, omite que lo único que se les permitió fue exponer si la sentencia se impugnaba por haberse dictado en contravención de la ley o incurriendo en un error en su aplicación o interpretación. Por consiguiente, no pudieron defender a su cliente en cuanto al fondo de la cuestión y el Tribunal de Casación no admitió los documentos y testimonios pertinentes que presentaron para la defensa.

75. En cuanto al tratamiento médico dispensado y los malos tratos documentados en su comunicación anterior, la fuente afirma que el Gobierno no menciona los dos traslados del Sr. Al-Mahmeed (que tuvieron lugar el 15 y el 18 de agosto de 2015) al Hospital Jaber al-Ahmad de las Fuerzas Armadas, después de que perdiera el conocimiento a consecuencia de los actos de tortura a los que había sido sometido. Además, refuta las alegaciones del Estado de que el Sr. Al-Mahmeed fue llevado al hospital en ambulancia y reafirma que fue trasladado en un vehículo de comando militar de las fuerzas de seguridad sin camilla, asientos ni cinturones, y que durante esos traslados y durante su ingreso fue humillado y sometido a malos tratos. La fuente también aporta imágenes de la resonancia magnética realizada al Sr. Al-Mahmeed, en las que se observa con claridad que presenta una hernia discal grave.

76. En vista de las impugnaciones formuladas por el Gobierno con respecto al acceso a las pruebas, la fuente invita a las autoridades a que faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad donde se aprecian la entrada del Palacio de Justicia, las dependencias de la Fiscalía, situada en el octavo piso del edificio, y el hospital militar. Solicita asimismo el historial médico del Sr. Al-Mahmeed, en posesión del Hospital Jaber al-Ahmad de las Fuerzas Armadas, y la ropa que vestía en el momento de ser detenido y en la que se apreciaban con claridad manchas de sangre causadas por las torturas a las que había sido sometido. Además, insiste en que el Sr. Al-Mahmeed permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 26 días, del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2015, y recuerda que las autoridades de Kuwait no han aportado ninguna prueba que lo refute.

77. En cuanto a las armas y municiones encontradas durante el registro domiciliario, la fuente reitera que el Sr. Al-Mahmeed estaba en posesión de ropa militar, dos armas de fuego y municiones que había utilizado cuando había prestado servicio en el ejército de 1987 a 1993 y durante la guerra del Golfo. En cuanto a los demás artículos de la lista, afirma que fueron colocados en la casa por las Fuerzas de Seguridad de Kuwait.

Deliberaciones

78. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información oportuna y detallada que le facilitaron en sus comunicaciones.

79. La fuente ha alegado que la privación de libertad del Sr. Al-Mahmeed se inscribe en las categorías I y III. Si bien no menciona específicamente las categorías del Grupo de Trabajo, el Gobierno rechaza esas alegaciones. El Grupo de Trabajo las examinará por separado.

80. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Al-Mahmeed es arbitraria, el Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las

alegaciones. La mera afirmación por el Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

Categoría I

81. El Grupo de Trabajo recuerda que considera que toda privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría I si carece de fundamento jurídico. En el presente caso, la fuente ha alegado que el Sr. Al-Mahmeed fue detenido en su domicilio el 15 de agosto de 2015 sin una orden de detención y sin que se le comunicaran los motivos por los que era detenido, y que en ese mismo momento se registró su casa y se le confiscaron pertenencias sin que mediara una orden de registro. El Gobierno niega estas alegaciones aduciendo que el Sr. Al-Mahmeed fue aprehendido en virtud de una orden judicial emitida por un fiscal, de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, y que el 17 de agosto de 2015 un fiscal formuló acusación en su contra.

82. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 9, párrafo 2, del Pacto exige que toda persona detenida no solo sea informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, sino también, y sin demora, de la acusación formulada contra ella³.

83. En el presente caso, el Gobierno ha alegado que el Sr. Al-Mahmeed fue detenido en virtud de una orden judicial emitida por un fiscal. Sin embargo, no ha facilitado ninguna explicación en respuesta a las alegaciones de que el Sr. Al-Mahmeed no fue informado en el momento de su detención de las razones que la motivaban. El mero hecho de que se dictara una orden judicial no significa por sí solo que las autoridades que la ejecutaron se la mostraran al Sr. Al-Mahmeed o le notificaran su contenido. No se ha alegado que el Sr. Al-Mahmeed opusiera resistencia en ese momento, y no parece que hubiera ningún factor objetivo que pudiera interferir en la ejecución de la detención por las autoridades. El Gobierno ha tenido la oportunidad de fundamentar su afirmación de que el Sr. Al-Mahmeed fue en efecto informado de las razones de su detención, pero no lo ha hecho. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acepta las alegaciones de la fuente de que no se informó al Sr. Al-Mahmeed de los motivos de su detención, lo que constituye una vulneración del artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

84. Además, el Grupo de Trabajo observa que, según el Gobierno, el Sr. Al-Mahmeed fue acusado por el fiscal el 17 de agosto de 2015, lo que se ajustaría al artículo 60, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal, mientras que la fuente afirma que la acusación no se formuló hasta el 19 de agosto de 2015. Sin embargo, de nuevo el Grupo de Trabajo debe tener en cuenta que el Gobierno ha tenido la oportunidad de fundamentar su afirmación sobre la fecha en la que se formuló la acusación contra el Sr. Al-Mahmeed, pero no lo ha hecho. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo acepta las alegaciones de la fuente de que el Sr. Al-Mahmeed no fue acusado hasta el 19 de agosto de 2015.

85. Además, el Sr. Al-Mahmeed fue acusado por un fiscal y compareció ante un fiscal en numerosas ocasiones. Fue también un fiscal quien le impuso inicialmente la medida de detención preventiva, y el Sr. Al-Mahmeed no compareció ante una autoridad judicial hasta el 24 de agosto de 2015, cuando fue llevado ante un juez para que se prorrogara dicha medida. Si bien el Grupo de Trabajo toma nota de la afirmación del Gobierno de que en el artículo 60, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal se establece que la persona detenida debe comparecer ante un investigador en un plazo de 48 horas, el artículo 9, párrafo 3, del Pacto exige de forma inequívoca que el detenido debe ser llevado ante una autoridad judicial u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales⁴.

86. Dicho requisito no se cumplió en el caso del Sr. Al-Mahmeed, ya que no fue llevado ante una autoridad judicial en el plazo de 48 horas, y el Gobierno no ha aportado ninguna información sobre las circunstancias excepcionales que pudieran haber justificado esa

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 29; véanse también las opiniones núms. 2/2018, 4/2018, 42/2018, 43/2018 y 79/2018.

⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32.

demora⁵. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado el artículo 9, párrafo 3, del Pacto⁶.

87. Además, como el Grupo de Trabajo ha argumentado sistemáticamente⁷, para considerar que una privación de libertad es en efecto legal, la persona detenida debe tener derecho a impugnar su legalidad ante un tribunal, tal y como se contempla en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. El Grupo de Trabajo desea recordar que, de acuerdo con los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo, que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática⁸. Este derecho, que es una norma imperativa del derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación de libertad⁹.

88. Por lo tanto, dado que el Sr. Al-Mahmeed no compareció ante una autoridad judicial hasta el inicio efectivo de su juicio, el 15 de septiembre de 2015, también se vulneraron los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto. El Grupo de Trabajo observa la alegación de que se negó al Sr. Al-Mahmeed el acceso a asistencia letrada hasta el 10 de septiembre de 2015. Si bien el Gobierno rechaza esta afirmación, no ha precisado el momento en que el Sr. Al-Mahmeed dispuso de asistencia jurídica ni ha fundamentado sus argumentos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Al-Mahmeed no tuvo acceso a asistencia letrada hasta el 10 de septiembre de 2015, lo que afectó negativamente a su capacidad para ejercer los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se ha producido otra vulneración de esta disposición.

89. Por último, el Grupo de Trabajo observa la alegación de que el Sr. Al-Mahmeed permaneció recluido en régimen de incomunicación desde su detención y hasta el 10 de septiembre de 2015. Si bien el Gobierno ha negado esta afirmación, no ha aportado ninguna prueba que respalde sus argumentos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo debe aceptar las alegaciones de la fuente. Como han sostenido el Grupo de Trabajo y otros mecanismos de derechos humanos, la reclusión en régimen de incomunicación atenta contra el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, reconocido en el artículo 9, párrafos 3¹⁰ y 4, del Pacto¹¹. La supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹² y es esencial para garantizar que dicha detención tenga fundamento jurídico. Dado que el Sr. Al-Mahmeed no ha podido impugnar su privación de libertad ante un tribunal, se ha vulnerado su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Además, su reclusión en régimen de incomunicación sustrajo al Sr. Al-Mahmeed de la protección de la ley, lo que constituye una vulneración del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 16 del Pacto.

90. En cuanto a la alegación de la fuente de que el Tribunal Supremo se extralimitó en sus competencias y límites jurisdiccionales al aumentar la pena impuesta al Sr. Al-Mahmeed, el Grupo de Trabajo recuerda que está facultado para evaluar las actuaciones de los tribunales y la propia ley para determinar si cumplen las normas internacionales¹³. A este respecto reitera que, cuando se le ha pedido que revise la aplicación de la legislación nacional por el poder judicial, se ha abstenido sistemáticamente de sustituir a las autoridades judiciales nacionales o de actuar como una suerte de tribunal

⁵ *Ibid.*, párr. 33.

⁶ Véase A/HRC/45/16/Add.2.

⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 1/2017, 6/2017, 8/2017, 30/2017, 2/2018, 4/2018, 42/2018, 43/2018 y 79/2018.

⁸ A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3.

⁹ *Ibid.*, párr. 11.

¹⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35.

¹¹ Véanse las opiniones núms. 45/2017, 46/2017, 35/2018, 9/2019, 44/2019 y 45/2019.

¹² Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal; A/HRC/30/37, párr. 3; y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 24.

¹³ Opinión núm. 33/2015, párr. 80.

supranacional¹⁴. Queda fuera del mandato del Grupo de Trabajo volver a evaluar la suficiencia de las pruebas u ocuparse de los errores de derecho presuntamente cometidos por el tribunal nacional. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede pronunciarse sobre si el Tribunal Supremo se extralimitó en sus competencias en el caso del Sr. Al-Mahmeed.

91. El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta que ha establecido que se han vulnerado el artículo 2, párrafo 3, y el artículo 9, párrafos 1, 2, 3 y 4, del Pacto, concluye que la privación de libertad del Sr. Al-Mahmeed carece de fundamento jurídico y, por lo tanto, es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

Categoría III

92. La fuente ha alegado que en los diversos juicios de que fue objeto el Sr. Al-Mahmeed se vulneraron sus derechos relativos a un juicio imparcial, y particularmente sus derechos a la igualdad de medios procesales, a no ser sometido a coacción para obtener una confesión y a la asistencia letrada. El Gobierno niega estas alegaciones y aporta numerosos informes de prensa que supuestamente demuestran que el Sr. Al-Mahmeed dispuso de representación letrada. El Gobierno también considera falsas las alegaciones de que el Sr. Al-Mahmeed y su representante legal no pudieron acceder a las imágenes de circuito cerrado de televisión y a diversas pruebas relativas a los supuestos malos tratos sufridos por el acusado, y niega con vehemencia que este fuera objeto de malos tratos, para lo que aporta como prueba un informe médico forense. El Gobierno también afirma que el Sr. Al-Mahmeed confesó sin ser objeto de coacción alguna.

93. El Grupo de Trabajo recuerda que, a fin de preservar la igualdad de medios procesales, toda persona sometida a privación de libertad tiene derecho a acceder al material relacionado con la detención o presentado por el Estado ante el tribunal, incluida la información que pueda ayudar a la persona a aducir que su privación de libertad es ilegal o que los motivos para imponérsela ya no existen¹⁵. Sin embargo, ese derecho no es absoluto y la divulgación de información puede someterse a restricciones si son necesarias y proporcionadas para lograr un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha demostrado que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado, por ejemplo, con la presentación de resúmenes de información en los que se señale claramente el fundamento de hecho de la privación de libertad¹⁶. En el presente caso, el Gobierno se limitó a afirmar que las alegaciones formuladas por la fuente, a saber, que se había impedido al Sr. Al-Mahmeed y a sus abogados acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad, las pruebas y los documentos del caso, eran falsas y calumniosas. El Grupo de Trabajo no puede aceptar una impugnación tan genérica sin más fundamentación. El Grupo de Trabajo también observa que el Gobierno ha rechazado en términos similares la afirmación de que a los abogados del Sr. Al-Mahmeed no se les permitió aportar pruebas contra las nuevas acusaciones que la Fiscalía había presentado ante el Tribunal Supremo. En consecuencia, considera que se negó al Sr. Al-Mahmeed la igualdad de medios procesales, lo que constituye una vulneración del artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto¹⁷.

94. Además, la fuente ha alegado y el Grupo de Trabajo ha corroborado que no se permitió al Sr. Al-Mahmeed disponer de asistencia letrada hasta el 10 de septiembre de 2015. Según el Gobierno, su caso ya había sido remitido a los tribunales el 1 de septiembre de 2015 y la primera vista se celebró el día 15 de ese mismo mes. Así pues, en el mejor de los casos, el abogado dispuso de cinco días para preparar la defensa en una causa que, como le parece evidente al Grupo de Trabajo, entrañaba una gran complejidad y múltiples acusaciones asociadas a fuertes sanciones, tal como el propio Gobierno ha expuesto con detalle.

¹⁴ Opinión núm. 40/2005.

¹⁵ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal; y A/HRC/30/37, anexo, principio 12 y directriz 13. Véanse también las opiniones núms. 8/2017, 2/2018 y 18/2018.

¹⁶ A/HRC/30/37, anexo, directriz 13, párrs. 80 y 81.

¹⁷ Véanse también las opiniones núms. 9/2017, 2/2018, 76/2018 y 17/2019.

95. El artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto exige que toda persona acusada de un delito disponga del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y pueda comunicarse con un defensor de su elección. El Grupo de Trabajo duda de que este requisito se cumpliera en el presente caso y de que el tiempo concedido a la defensa fuera suficiente para estudiar las acusaciones presentadas en una causa de semejante complejidad, en la que el acusado se enfrentaba a más de una docena de cargos y a la posibilidad de ser condenado a una pena de prisión elevada. Si bien la fuente no ha indicado si el equipo de defensa solicitó que se le concediera más tiempo ni si esas solicitudes fueron denegadas, el Grupo de Trabajo señala que ello habría sido inútil, ya que el Sr. Al-Mahmeed permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta el 10 de septiembre de 2015. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que se ha vulnerado el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto¹⁸.

96. Por último, la fuente ha formulado graves alegaciones relativas al trato recibido por el Sr. Al-Mahmeed de las autoridades de Kuwait durante su detención y su prolongada reclusión en régimen de aislamiento. El Gobierno las niega rotundamente y aduce que el Sr. Al-Mahmeed no denunció durante sus diversas comparecencias ante el fiscal y los tribunales el trato que había recibido. Además, se refiere al informe médico forense, que, en su opinión, confirma que no hubo malos tratos. También niega que el Sr. Al-Mahmeed fuera recluido en régimen de aislamiento. No obstante, de nuevo el Grupo de Trabajo se ve obligado a señalar que el Gobierno, para respaldar sus afirmaciones, ha mencionado diversas disposiciones de su Constitución y su legislación nacional, pero no ha facilitado ninguna información relativa a la forma en que estas se aplicaron en el caso concreto del Sr. Al-Mahmeed.

97. Además, el Sr. Al-Mahmeed estuvo incomunicado del 15 de agosto al 10 de septiembre de 2015. El Grupo de Trabajo ya ha tratado anteriormente esta cuestión y desea recordar que la reclusión en régimen de incomunicación puede de por sí constituir tortura¹⁹. El Comité contra la Tortura ha aclarado que la reclusión en régimen de incomunicación crea condiciones que vulneran la Convención contra la Tortura²⁰ y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha sostenido sistemáticamente que su imposición es ilegal²¹. Si bien el Gobierno ha facilitado las fechas en que el Sr. Al-Mahmeed fue trasladado al hospital, el Grupo de Trabajo observa que no ha explicado los motivos de esas visitas. Además, en relación con el informe forense en el que se basa el Gobierno para negar las alegaciones de malos tratos, el Grupo de Trabajo observa que se realizó cuando ya había transcurrido un tiempo considerable desde que el Sr. Al-Mahmeed había denunciado los hechos, lo que habría permitido que desaparecieran las señales físicas²². Por último, el Gobierno tampoco ha respondido a las alegaciones de que se negó a la defensa acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad y a la ropa y el historial médico del Sr. Al-Mahmeed.

98. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que las alegaciones que tiene ante sí ponen de manifiesto indicios razonables de que se ha vulnerado el artículo 7 del Pacto y remite el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que adopte las medidas que estime oportunas. Considera asimismo que se ha vulnerado el artículo 14, párrafo 1, ya que el tribunal, al no suspender las actuaciones cuando se presentaron las denuncias de malos tratos, no actuó de manera justa e imparcial²³. También considera que se vulneró el derecho del Sr. Al-Mahmeed a no ser obligado a confesarse culpable, garantizado por el artículo 14, párrafo 3 g). Una confesión forzada

¹⁸ Véanse *Grant c. Jamaica* (CCPR/C/56/D/597/1994); y Comité de Derechos Humanos, *Sawyers y otros c. Jamaica*, comunicaciones núms. 226/1987 y 256/1987.

¹⁹ Resolución 68/156 de la Asamblea General.

²⁰ Véase, por ejemplo, A/54/44, párr. 182 a).

²¹ Véanse, por ejemplo, A/54/426, párr. 42; y A/HRC/13/39/Add.5, párr. 156.

²² Véase el *Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, párrs. 104 a 106.

²³ Opiniones núms. 46/2017, 53/2018 y 24/2020.

empaña todo el proceso, con independencia de que se disponga de otras pruebas que respalden la sentencia²⁴.

99. El Gobierno niega también la alegación de que el Sr. Al-Mahmeed firmó una declaración sin poder leerla previamente porque no se le permitió ponerse sus gafas de lectura. Afirma a este respecto que la declaración le fue leída en voz alta, por lo que el Sr. Al-Mahmeed pudo comprender su contenido. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por el hecho de que no se permitiera al Sr. Al-Mahmeed ponerse sus gafas de lectura y se viera por ello obligado a firmar un documento que no podía leer. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Al-Mahmeed fue en efecto obligado a firmar una declaración cuyo contenido desconocía y que podía ser autoincriminatoria, lo que constituye una vulneración del artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto.

100. Por último, el Grupo de Trabajo observa las alegaciones, no refutadas por el Gobierno, de que el Sr. Al-Mahmeed fue recluido en régimen de aislamiento durante casi cinco meses, lo que constituye un período excepcionalmente prolongado. De conformidad con la regla 45 de las Reglas Nelson Mandela, la imposición de la reclusión en régimen de aislamiento debe ir acompañada de ciertas salvaguardias. Dicho régimen solo debe aplicarse en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente con el permiso de una autoridad competente. No parece que se hayan respetado esas condiciones en el presente caso. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento durante más de 15 días consecutivos está prohibida en virtud de las reglas 43, párrafo 1 b), y 44 de las Reglas Nelson Mandela²⁵.

101. Por consiguiente, teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Al-Mahmeed es arbitraria y se inscribe en la categoría III.

102. Si bien el Gobierno sostiene que el Sr. Al-Mahmeed ha recibido toda la atención médica necesaria y alimentos nutritivos durante su reclusión, el Grupo de Trabajo sigue preocupado por su salud y su bienestar. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que, de conformidad con el artículo 10 del Pacto, toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y que la denegación de asistencia médica constituye una vulneración de las Reglas Nelson Mandela, en particular las reglas 24, 25, 27 y 30. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental para que lo examine más detenidamente.

Decisión

103. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Zuhair Abdulhadi Haj al-Mahmeed es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

104. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Kuwait que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al-Mahmeed sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

105. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Al-Mahmeed inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte medidas urgentes para que el Sr. Al-Mahmeed sea puesto en libertad inmediatamente.

²⁴ Opinión núm. 34/2015, párr. 28.

²⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 83/2018 y 17/2019.

106. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Mahmeed y adopte las medidas correspondientes contra los responsables de la violación de sus derechos.

107. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes.

108. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión a través de todos los medios disponibles y de la forma más amplia posible.

Procedimiento de seguimiento

109. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Al-Mahmeed y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Al-Mahmeed;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Al-Mahmeed y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Kuwait con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

110. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

111. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

112. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁶.

[Aprobada el 27 de agosto de 2020]

²⁶ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.